

Octubre, 2014

**Centro de Documentación
de Honduras
(CEDOH)**

El Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) se ha dedicado al estudio de los temas de defensa y seguridad desde su inicio institucional en 1980. Los cambios en el contexto nacional, regional e internacional han marcado las formas novedosas de abordaje de estos temas partiendo de la relación compleja entre ambos y entre estos, la sociedad y los partidos políticos.

En lo expresado se explica el tránsito de los estudios en el tema, de las fuerzas armadas y su relación con lo político, a través de los golpes de estado, a la compleja relación entre fuerzas armadas y sociedad, a través de la represión de la protesta social y el servicio militar obligatorio. De igual manera, se concentró en el estudio de la reforma policial cuando se inició el debate acerca de su sustracción del ámbito de las fuerzas armadas, su inserción en el ámbito civil y su posterior colocación en la Secretaría de Seguridad, creada para tal fin.

La reforma policial se ha mantenido como una constante en el CEDOH a lo largo de los últimos años, incluyendo el tratamiento de los jóvenes infractores, las maras o pandillas juveniles, el vínculo entre migración y seguridad, el estudio del narcotráfico, la complejidad de la violencia y la importancia de una mirada integral que articule el corto, mediano y largo plazo, el estado y la sociedad, además de darle seguimiento a los esfuerzos gubernamentales por articular acciones coherentes para enfrentar la inseguridad, aunque no siempre con la claridad, coherencia y contundencia que la situación requiere. Propiciar el debate, crear condiciones para una ciudadanía informada, crítica y propositiva sobre el tema y generar estudios que conduzcan a una mejor toma de decisiones ha sido y sigue siendo un objetivo institucional.

CEDOH

Las condiciones que propician la inseguridad

Leticia Salomón¹

La condición de pobre no está asociada directamente a la delincuencia y violencia como componentes esenciales de la inseguridad, aunque es indudable que existe algún tipo de vinculación que se desarrolla en estrecha relación con otras condiciones o circunstancias. Lo anterior es importante para evitar los posicionamientos extremos que van desde afirmar que los países, colonias o áreas son criminales o violentos porque son esencialmente pobres (estigmatización de la pobreza), hasta el otro polo según el cual los pobres no tienen nada que ver con los componentes de la inseguridad.

Descubrir ese vínculo es importante para realizar un análisis objetivo que proporcione información oportuna para la toma de decisiones en materia de seguridad y que supere la visión externa, técnica y simplista de creer que la delincuencia y violencia

se combaten exclusivamente con estrategias contra la pobreza, programas de educación, atención primaria en salud y vivienda digna, con lo cual reducen los problemas de delincuencia y violencia a la existencia de pobres, de la misma manera en que se cree que el problema es de capacitación y equipamiento de los operadores de justicia, reduciendo el problema a un asunto de transferencia de conocimientos y ayuda de los que saben y tienen a los que no saben y no tienen. Algo similar ocurre con los que creen que es un problema de valores que se fueron debilitando o desapareciendo con la crisis de la familia tradicional (madre, padre, hijos), la gran cantidad de mujeres cabeza de familia o jefas de hogar, el aumento de mujeres en el mundo laboral, la escasa presencia religiosa o el debilitamiento del control sobre los hijos, con lo cual remiten al protagonismo de las iglesias y los cuarteles.

¹ Socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) en temas de defensa, seguridad y gobernabilidad, Directora de Investigación Científica y Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Las condiciones económicas

Es indudable que hoy más que nunca es válida la pregunta: ¿Qué hacer para que un niño que nazca hoy no se convierta en un infractor dentro de ocho o nueve años, o en un delincuente dentro de dieciocho años? Esta pregunta nos permitirá pensar en las fortalezas y debilidades de las instituciones del Estado encargadas de satisfacer las necesidades básicas de la población y de intervenir rápidamente ante una situación crítica en un momento y lugar determinados.

La condición de pobre puede constituirse en un elemento propiciador de la delincuencia y violencia, en particular si se consideran los elementos de exclusión y desigualdad social asociados a la pobreza. Vivir en condiciones precarias, sin empleo permanente o con ingresos insuficientes, dificultades para educar a los hijos porque se necesita su ayuda para obtener ingresos (vendiendo tortillas, manejando molinos, recogiendo basura,

procesando o entregando alimentos, etc.), dificultades para acceder al transporte público o recibir atención médico-hospitalaria, son factores que contribuyen a la insatisfacción, el pesimismo y la frustración con respecto a la familia, el barrio, la colonia o el país en que viven.

Las condiciones económicas constituyen un factor de inestabilidad que puede dar paso a la delincuencia y violencia, pero se trata de concretar salidas para tener condiciones económicas de las que carecen o para mejorar las ya existentes, lo cual incluye no solo a personas de ingresos bajos sino también a personas de otros estratos económicos (medio-bajo, medio-medio y medio-alto), lo cual se agrava por el efecto demostración que se transmite a través de la televisión, internet, redes sociales o historias escuchadas de los migrantes o sus familiares quienes llegan a tener en esos países lo que no podrían tener en el suyo.

Las condiciones sociales

El efecto demostración que llega a través de los diferentes medios de comunicación a las zonas más excluidas se expresa en la necesidad artificial de tener celulares o juegos electrónicos cada vez más

sofisticados y obtener la ropa, zapatos y accesorios similares a los que usan sus familiares, vecinos y amigos en los países a los que emigran, o los héroes de las películas, series o novelas que ven en la televisión.

La inseguridad es un tema tan sensible a la ciudadanía que no debe cometerse el error de politizarlo porque al hacerlo pierde contenido y posibilidades de sostenibilidad de las acciones estatales. La situación empeora cuando la politización se combina con un enfoque esencialmente represivo que enfatice en la mano dura porque con ello se corren dos riesgos:

concentrarse en lo inmediato (represión e impacto) minimizando lo mediano (prevención y sostenibilidad) y empujar la acción estatal al límite de los derechos de la ciudadanía, propiciando violaciones de los mismos en el momento en que se traspase el límite del estado de derecho.

CEDOH

Esta situación se suma a la disminución de la educación como factor de movilidad social ascendente, en particular si se compara con la forma rápida de obtención de ingresos mayores a través de actividades ilegales vinculadas a la delincuencia común u organizada (delincuencia menor, intermedia y mayor). La situación empeora si se considera la situación generalizada de impunidad, entendida como ausencia de castigo por debilidad institucional, ineficiencia de los operadores de justicia o involucramiento delictivo de los mismos.

Las personas de casi todos los estratos sociales, en particular los jóvenes, empiezan a sentir que vale la pena vivir en la ilegalidad si eso les permite disfrutar de la vida con cosas materiales a las que no tendrían acceso en las condiciones normales de su vida, sin importar el riesgo que corren de ser detenidos en algún momento o de perder la vida en el intento.

La falta de oportunidades de encontrar un trabajo con un salario digno al terminar la secundaria o la universidad, hace que muchos jóvenes pasen a engrosar las filas de los que ni estudian ni trabajan, con lo cual la tentación de involucrarse en actividades delictivas peligrosas pero rentables, se vuelve real.

Nuestra sociedad se volvió más abierta al mundo y a sus influencias. El acceso masivo a internet (correo electrónico, redes sociales, llamadas telefónicas gratis, aplicaciones de juegos electrónicos), la facilidad de transporte entre uno y otros países y el boom de las telecomunicaciones tienden a reducir las diferencias sociales y a impulsar un acceso masivo y uniforme al mundo del conocimiento en particular al tecnológico.

Las condiciones institucionales

En la medida en que la delincuencia se va volviendo más compleja y sofisticada, se requieren instituciones con capacidad similar o superior para combatirlos en condiciones de igualdad. No pueden los operadores de justicia enfrentar a grupos altamente equipados y con sofisticados niveles de comunicación, inteligencia y capacidad de acción,

con un conocimiento primario y un equipo que no está a la altura de las circunstancias. En este sentido, todo apoyo para fortalecer estas deficiencias es necesario, teniendo el cuidado de no reducir a esto la clave del éxito para reducir los niveles de inseguridad.

Las instituciones del sistema de justicia son

En el combate a la inseguridad hay que diferenciar claramente las acciones encaminadas a reducir la dimensión de la misma asociada a la delincuencia y la violencia, de las acciones encaminadas a reducir la percepción de inseguridad. La primera se expresa en reducción cuantitativa y cualitativa de la inseguridad, mientras que la segunda se traduce en tranquilidad y optimismo de la

ciudadanía sin que se reduzcan necesariamente los datos de la inseguridad. La acción estatal concentrada en reducir la percepción de la inseguridad y no la dimensión de la misma se queda en lo inmediato y pasajero cuando la ciudadanía demanda lo mediato y permanente.

CEDOH

dirigidas por personas que se exponen a las mismas influencias de la sociedad del conocimiento: quieren ganar más, tener casas, vehículos y propiedades, viajar y tener a sus hijos en los mejores colegios y universidades. Esto los vuelve vulnerables a las tentaciones que provienen de los delincuentes a cambio de su disimulo (ver hacia otro lado, desviando la atención), su complicidad (avisándoles sobre las acciones oficiales), manipulando o desestimando las pruebas, debilitando los casos o exonerándolos de culpa y dejándolos en libertad, con lo cual se expresan como corruptos que reciben estímulos económicos a cambio del encubrimiento o apoyo a los delincuentes.

La politización partidaria de estas instituciones constituye otro factor de debilidad institucional pues muchas veces los que delinquen, en particular los delincuentes mayores, reciben la protección de líderes políticos a nivel nacional, regional o local, los que a su vez tienen cercanía o influencia con los operadores de justicia y se encargan de colocar un manto protector que impide que reciban el castigo que se merecen.

Todo lo anterior se complica y traduce en mayores

niveles de ineficiencia con el involucramiento delictivo de los operadores de justicia, en particular los policías, los cuales se encargan no solo de cometer delitos similares a los delitos de los criminales que persiguen, sino que encabezan bandas delincuenciales que utilizan el conocimiento, equipo y poder asociado a la institución para impulsar acciones de magnitud intermedia o mayor, contratando muchas veces a delincuentes menores para hacer algunos trabajos propios del oficio, o realizando acciones aisladas o permanente con los delincuentes mayores.

Finalmente, el deterioro institucional de los operadores de justicia se alimenta de la impunidad con que desarrollan las actividades ilícitas y la forma en que actúan sin que sean capturados, sancionados, expulsados y puestos a la orden de los tribunales. En casos extremos en los que son descubiertos o acusados, se acude a la vieja tradición militar de rotarlos, es decir, de sacarlos de un cargo y pasarlos a otro cargo u otra región en los cuales vuelven a hacer lo mismo en una especie de círculo vicioso que atenta contra la seguridad de la ciudadanía.

La ciudadanía debe empezar a exigir cuentas a todos los que han conducido el estado desde la transición a la democracia en 1980, sin olvidar los 17 años en que los militares estuvieron al frente de la administración pública y todos los años que mantuvieron y deformaron a la policía como un apéndice de las fuerzas armadas. Militares, liberales y nacionalistas son los responsables del país inseguro que tenemos

hoy por las decisiones equivocadas, la falta de decisiones o la indiferencia con que vieron el auge de la inseguridad, la debilidad del sistema de justicia, la ineficiencia de los policías, fiscales y jueces, su involucramiento delictivo y su acelerado deterioro ético. Por ello deben rendirle cuentas a la sociedad.

CEDOH